HAL
open science

Nicaragua, el giro autoritario del sandinismo

Maya Collombon

To cite this version:

Maya Collombon. Nicaragua, el giro autoritario del sandinismo. Les Études du CERI, 2019, 239-240, pp.22 - 25. hal-03457683

HAL Id: hal-03457683

https://sciencespo.hal.science/hal-03457683v1

Submitted on 30 Nov 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Nicaragua, el giro autoritario del sandinismo

Maya Collombon

Nicaragua ha tenido un regreso dramático en las noticias internacionales después de varias décadas de olvido. En efecto, desde mediados de abril de 2018, el país entró en la mayor crisis política y social de su historia desde la revolución sandinista de 1979. Más de 400 muertos, más de 2000 heridos, 400 desaparecidos y otros tantos torturados en seis meses, cárceles repletas y decenas de miles de nicaragüenses que escapan mayoritariamente hacia la vecina Costa Rica.

Sin embargo, desde el episodio revolucionario de los años 1980, el país ha quedado en la memoria internacional como ejemplo de una revolución exitosa y algunas de sus personalidades políticas de la época siguen habitando en la memoria de las izquierdas europeas. El regreso al poder en 2006 de Daniel Ortega, héroe de la revolución sandinista y antiguo presidente durante los años 1980, no puede, sin embargo, entenderse sin considerar las profundas transformaciones que afectaron tanto al partido sandinista (Frente Nacional de Liberación Nacional-FSLN) como a Daniel Ortega en sí mismo. El que dirige la Nicaragua contemporánea es un hombre que, bajo una retórica revolucionaria todavía apremiante, se encarna en un caudillismo nepotista donde el clan familiar permanece en el centro de las cuestiones tanto políticas como económicas del poder. Un poder que desde ahora tiene sangre, mucha sangre en sus manos.

Construir el autoritarismo sandinista

Cuando Daniel Ortega y el FSLN pierden las elecciones de 1990 contra la Unión Nacional de Oposición (UNO) dirigida por Violeta Chamorro, los sandinistas están lejos de imaginar que esperarían 16 años antes de volver al poder. Durante estos 16 años, diferentes transformaciones internas al partido condujeron progresivamente al fortalecimiento de la disciplina partidista en torno a la dirección de Daniel Ortega y a reanudar las alianzas que en el contexto postrevolucionario de los años 1990 podrían parecer antinaturales. La primera etapa de esta transformación comienza con el congreso del FSLN en 1995 durante el que dos tendencias, una más radical en torno a Daniel Ortega y la otra más reformista guiada por Sergio Ramírez y Dora María Téllez ambos parlamentarios del partido, se oponen sobre la dirección de éste y sus decisiones estratégicas. La oposición resulta en una escisión y algunos meses después, la tendencia de Sergio Ramírez y Dora María Téllez que quedó en minoría, crea un nuevo partido, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). La separación provoca, sobre todo a lo interno del FSLN, el comienzo de una estrategia de disciplina partidista. El partido es progresivamente depurado de todo desacuerdo interno y concluye al final de la década estando fuertemente alineado en torno de la figura de Daniel Ortega, lo que la oposición describe como “Orteguismo”. La segunda etapa de transformación está más relacionada con las alianzas que Daniel Ortega logra hacer con los que fueron sus antiguos enemigos. La principal alianza es la que establece con el antiguo presidente, Arnoldo Alemán (1996-2000) del Partido Liberal Constitucional (PLC). Este último fue procesado por corrupción

por su antiguo vicepresidente entonces en el poder, Enrique Bolaños. Éste podía cumplir pena de cárcel y buscó apoyo político. Ambos, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, firman a finales de 1999 un pacto político secreto, conocido por el nombre de "El Pacto", que propone un cierto número de reformas legislativas apoyadas por los parlamentarios de sus dos partidos que les aseguran la inmunidad parlamentaria en calidad de antiguos presidentes, la repartición entre partidos de la nominación de los altos funcionarios de las principales instituciones del Estado y, sobre todo, la reforma de la ley electoral[1]. La reforma votada en 2000 se aplicará a partir de las elecciones de 2006. Al permitir la elección del presidente con más del 35% de los votos y más de 5% de diferencia con el segundo candidato, esta reforma facilita la elección de Daniel Ortega, quien gana con el 39% de los votos (cifra correspondiente a un electorado en ese momento bastante estable desde 1990 en torno al 40% del FSLN). No hace falta decir que este pacto tendrá efectos devastadores en los partidos de la oposición, que luego se dividirán en torno a una línea de fractura pacto/anti pacto, fractura que tendrá efectos de desunión profundos en la derecha nicaragüense.

El primer mandato de Daniel Ortega (2007-2011) se desarrolla bajo los buenos auspicios del gran hermano venezolano. Hugo Chávez financió entonces ampliamente al gobierno sandinista lo que le permitió desarrollar políticas sociales a gran escala, beneficiando a una parte importante de la población más pobre del país, preferiblemente leal al FSLN. Estas políticas (programa Hambre Cero, distribución de una canasta básica, Plan Techo, etc.) son distribuidas por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), entidades locales del partido, que aseguran una buena correspondencia entre la distribución de programas sociales y el partidismo, mientras promueven una actividad militante de base que luego experimentará un verdadero fenómeno de masificación. Esta política de atención a los más pobres, sobre todo si son sandinistas, tuvo una segunda época, ciertamente menos próspera, durante el segundo mandado de Ortega (2012-2016) y que progresivamente se fue reduciendo con la disminución de los fondos venezolanos. Después de la caída del petróleo de 2014, a pesar del apoyo reiterado de Nicolás Maduro, se vuelve rápidamente evidente para el gobierno sandinista que Nicaragua debe buscar a otros socios financieros para compensar la retirada progresiva de Venezuela. Nicaragua se aproxima entonces a un oscuro empresario chino, Wang Jing, al que le otorga en junio de 2013, después de una discusión de dos horas en la Asamblea Nacional, la concesión por 50 años, renovables una vez, de un futuro canal interoceánico, competidor del canal de Panamá. Al año siguiente, en 2014, Daniel Ortega, quien ha estado pensando en reelección indefinida, obtiene del Consejo Supremo de Justicia, del cual nombró a la mayoría de los miembros, una reforma constitucional que le permite volver a presentarse indefinidamente en el cargo. Después de ganar las elecciones de 2012 con el 62% de los votos y las de 2016 con el 72%, nada parece detener su toma de control de todas las esferas del país, tanto políticas como sociales y económicas.

En efecto, detrás de las reformas políticas y la gestión patrimonial del poder que se resume bien en la elección en 2016 de su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, existe también

[1] S. Marti i Puig, D. Close (dir.), *Nicaragua y el FSLN (1979-2009) ¿Que queda de la revolución ?,* Barcelona, ed. Bellaterra, 2009.

un acaparamiento económico de los recursos del país. Como bien lo describió Florence Babb[2], la élite económica sandinista se acercó progresivamente a la élite política sandinista al punto de volverse una sola y un mismo grupo con intereses compartidos. Lejos del estereotipo de una Nicaragua revolucionaria preocupada por los más pobres, las políticas económicas de la Nicaragua sandinista de los años 2000 se parecen mucho a las de sus predecesores, políticas neoliberales que en un contexto de fuerte crecimiento económico beneficiaron esencialmente a un grupo bien reducido de empresarios, sandinistas, liberales como conservadores, donde la lealtad política cuenta mucho menos que el valor de los contratos.

Después de más de una década, el clan Ortega también ha conseguido construir un poder autoritario, modificando a su manera las normas jurídicas, limitando en gran medida el poder de los partidos de oposición, acaparando los recursos económicos mientras se apoya en un discurso de atención a los más pobres llamado a alimentar la amplia movilización de activistas sandinistas. Al difundir su poder a todos los niveles, el clan Ortega logra gradualmente cerrar los espacios de poder y, cuando es necesario reprime sin vacilar a los grupos de protesta (estudiantes, jubilados, feministas, campesinos) que no han dejado de aparecer y de fortalecerse durante la década a pesar de todo[3].

Consolidar la autoridad, reinventar la dictadura

El 12 de abril de 2018, una parte importante de la Reserva de la Biosfera Indio Maíz, en la costa atlántica del país fue destruida por un inmenso incendio forestal. Durante casi cuatro días, no hubo reacción del gobierno sandinista, que incluso se dio el lujo de rechazar la ayuda ofrecida por el gobierno de Costa Rica. Algunos días más tarde, las primeras manifestaciones estudiantiles reclaman la intervención del Estado para apagar el fuego. El 18 de abril los jubilados -agrupados desde hacía años para reclamar una revalorización de la jubilación[4]- se unen a los estudiantes en las calles, reclamando también la anulación de la reforma de jubilación recientemente anunciada por el gobierno. Ese día comienza la represión del gobierno, un primer muerto, arrestos arbitrarios en masa, la movilización de las brigadas antidisturbios para impedir las manifestaciones. El conflicto se recrudece. Durante 5 días, salen a las calles cada vez más estudiantes para protestar contra el gobierno, las imágenes circulan en todo el país con los detalles de la represión. Los teléfonos graban y difunden las imágenes de ataques, de heridas, de asesinatos. Los nicaragüenses de todas las edades y de todas las clases sociales, politizados o no, se unen a los grupos de estudiantes, manifestando o apoyando a los que luego comenzaron a ocupar la mayor parte de las universidades de la capital. Luego de una primera tregua, los enfrentamientos empezaron de nuevo, los estudiantes fabrican barricadas de adoquines e intentan defenderse de los

[2] F. Babb, "Recycled Sandalistas: From Revolution to Resorts in the New Nicaragua", *American Anthropologist*, Vol. 106, n° 3, 2004, pp. 541-555.

[3] M. Collombon, D. Rodgers, "Sandinismo 2.0: reconfigurations autoritaires du politique, nouvel ordre économique et conflit social", *Cahiers des Amériques latines*, n° 87, 2018, pp. 13-36.

[4] Y. Chamorro, "Movilización social y tácticas de control en el neosandinismo: el caso de #OcupaINSS", *Cahiers des Amériques latines*, n° 87, 2018, pp. 91-115..

ataques de policías o paramilitares armados solamente con lanza piedras o morteros. La situación se vuelve totalmente crítica a medida que la lista de muertos, que se cuentan por centenares, crece a diario, bajo un mismo procedimiento represivo resumido por Amnistía Internacional como: "Disparar para matar"[5].

A principios de mayo, la poderosa iglesia católica de Nicaragua decide intervenir y abre una mesa de negociación donde actuará de mediadora. Ortega decide en un primer momento participar, pero se retira rápidamente de las negociaciones dejando su sitio a portavoces que repiten en bucle las mismas frases: los estudiantes son "delincuentes", "vándalos", "terroristas"… Las negociaciones disminuyen y se detienen finalmente dos meses más tarde. Ninguna de las demandas de los estudiantes que integran un frente más amplio de oposición es escuchada, con Ortega rechazando categóricamente la solicitud de adelantar las elecciones a marzo de 2019. Su única concesión fue la llegada al territorio nicaragüense de una delegación de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que comienza a investigar los abusos del gobierno. Las cifras hablan por sí solas[6].

Seis meses después del comienzo de la crisis, la situación política en Nicaragua se bloquea, los dos bandos ya no dialogan, pero los actos de represión continúan inhibiendo gradualmente las acciones de protesta. Después de la prohibición de manifestar, asistimos a la multiplicación de los arrestos de cualquier nicaragüense que intente expresar su desacuerdo, como la manifestación clandestina abortada incluso antes de su inicio a mediados de octubre de 2018: mientras que algunos opositores se encontraron en un supermercado a falta de poder reunirse en una plaza como estaba previsto por encontrarse inaccesible debido a las fuerzas del orden, los policías intervinieron y detuvieron a la mayor parte de los presentes. Ahora está claro que el Estado, estancado y debilitado, sin un apoyo internacional significativo, ha vuelto a caer en una política de terror de comprobada eficacia en las operaciones cotidianas: los nicaragüenses están atemorizados y las movilizaciones fuertemente restringidas. Ortega es más que nunca un nuevo Somoza.

Traducción: Lianne Guerra

[5] Amnistía Internacional, "Shot to kill. Nicaragua's strategy to repress protest", 29 de mayo de 2018.

[6] CIDH, "Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua", Comisión interamericana de los derechos humanos CIDH, OEA, 21 de junio de 2018.